

Notas sobre el Mercado Interior Europeo

El control parental llega a los videojuegos

El Parlamento Europeo estudia un "botón rojo" que limite los contenidos inapropiados en juegos de ordenador y consolas

EFE - Bruselas - 12/02/2009

La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer un informe en el que insta a un mayor control de los videojuegos y pide la incorporación de un "botón rojo" a ordenadores y consolas con el que los padres puedan desactivar o limitar los juegos que consideren inapropiados.

Los eurodiputados defienden esa medida al considerar que los sistemas de clasificación de contenidos no son suficientes a día de hoy, en especial en el caso de los juegos en línea, fácilmente accesibles a través de Internet.

El informe, que recoge numerosas recomendaciones en este ámbito, no aboga sin embargo por legislar a escala europea sobre el etiquetado de los videojuegos, sino que considera mejor impulsar la cooperación entre los Estados miembros en base al sistema en vigor.

Éste, llamado PEGI, clasifica mediante un código los juegos por edades y temática (miedo, violencia, sexo, drogas, discriminación o insultos).

Los eurodiputados quieren que los países europeos eliminen sus diferencias y alcancen un mecanismo común basado en PEGI, evitando que las medidas nacionales puedan fragmentar el mercado.

Además, piden responsabilidad a los propietarios de cibercafés, pues recuerdan que, según un Eurobarómetro, un 3,2% de jóvenes entre 16 y 17 años tiene acceso a Internet en estos establecimientos sin ningún tipo de control parental.

El informe del PE, que se apoya en estudios recientes, señala que la violencia en los juegos no impulsa automáticamente comportamientos violentos, pero asegura que una "exposición prolongada" a ese tipo de escenas "puede tener un impacto negativo sobre el jugador".

Por ello, solicita medidas para evitar adicciones y comportamientos violentos, tanto a los productores como a los vendedores y a los padres.

El informe, aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria, será votado de forma definitiva por el pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo.

La huelga xenófoba de Reino Unido se acerca al fin tras ceder la empresa

Principio de acuerdo para contratar a 100 británicos en la refinería de Lindsey

La huelga salvaje que mantienen los trabajadores de la refinería Lindsey que la petrolera Total tiene en Killingholme (Lincolnshire, este de Inglaterra) puede llegar hoy a su fin. Los sindicatos llegaron ayer a un principio de acuerdo -que esta mañana será sometido a la votación de las bases- por el que la empresa italiana IREM se compromete a que 102 de los 195 trabajadores de su subcontrata en Lindsey sean británicos.

Aunque los líderes sindicales subrayaron que el acuerdo no implica la expulsión de ningún trabajador extranjero, en la práctica veta la posibilidad de que se contrate a más extranjeros y supone una violación cuando menos del espíritu -si no de la letra- de la legislación europea que permite a las compañías utilizar a sus trabajadores de plantilla cuando ganan contratos de servicios en otros países de la Unión Europea.

IREM -que tiene contratados a 150 británicos en unas obras en Ravena (Italia)- pensaba cubrir básicamente con trabajadores italianos y portugueses de su plantilla los 195 empleos que va a generar el contrato que ganó en Lindsey, pero hasta ahora se habían firmado sólo un centenar de contratos.

La protesta de los trabajadores le ha obligado ahora a ceder a las presiones y reservar sobre todo a británicos los 95 contratos que quedan por asignar, con lo que del total de 195 empleos, 102 estarán ocupados por trabajadores locales. El acuerdo con los líderes sindicales llegó después de que las bases rechazaran ayer por la mañana un primer acuerdo alcanzado la noche anterior que reservaba a británicos 60 puestos.

Está aún por ver si un eventual acuerdo en Lindsey pondrá fin al movimiento contra la contratación de trabajadores extranjeros, que se ha extendido a una veintena de factorías energéticas por todo Reino Unido y ha desatado una gran polémica política. Para el ministro de Empresas y Negocios y ex comisario europeo, Peter Mandelson, la protesta alienta "políticas de xenofobia". Para los sindicatos, algunos ministros y la izquierda laborista, es un movimiento para defender los derechos de los trabajadores extranjeros explotados por empresarios continentales sin escrúpulos.

Pero la empresa siempre ha dicho que los trabajadores que ha traído a Reino Unido están con las mismas condiciones que los británicos, algo que los sindicatos no se creen y exigen ver pruebas. Y cuesta creer que trabajadores cualificados de la plantilla de una empresa italiana -aunque sea de la empobrecida Sicilia- estén pagados mucho peor que sus colegas de Inglaterra.

Lo que no están debatiendo los británicos es que su Gobierno es el primer responsable de que la UE no tenga una legislación más robusta en defensa de los trabajadores desplazados en comisión de servicios a otro país comunitario. Reino Unido fue el único Estado miembro que votó en 1996 contra la directiva europea de Trabajadores Desplazados por entederechos a esos trabajadores y eso sería perjudicial para el mercado interior comunitario. Y a los sindicatos lo que les preocupaba en aquel tiempo era sobre todo facilitar la salida de trabajadores británicos al exterior, más que la llegada de la competencia extranjera.

Contra la crisis, más Europa

Los restos de la herencia ideológica de Thatcher y Reagan se han derrumbado. Se inicia una época de mayor papel del sector público en la economía y mayor regulación del sistema financiero. La UE debe actuar unida

JOAQUÍN ALMUNIA 19/01/2009

El año 2009 va a estar dominado por la crisis. Recordarlo una vez más no pretende convertir la preocupación por lo que nos espera en una actitud pesimista sin espacio para la esperanza. En realidad, gracias a las decisiones adoptadas en los meses precedentes, las cosas pueden empezar a mejorar pronto. El riesgo de colapso financiero se ha superado y ya están mejorando algunos indicadores en los mercados monetarios. Ahora toca confiar en que los planes de apoyo al sector bancario, los recortes de tipos de interés y las medidas de estímulo fiscal, junto con el descenso de los precios de la energía, de otras materias primas y de la inflación, ayuden a paliar gradualmente

las consecuencias más agudas de la recesión. Pero no hay que hacerse ilusiones sobre la magnitud de la tarea que queda por delante: siendo realistas, cabe asumir que una catástrofe como ésta no podrá superarse completamente hasta que se ataquen sus raíces mediante un conjunto de reformas de calado. No sabemos a ciencia cierta cuándo alcanzaremos de nuevo la velocidad de crucero en el nivel de actividad económica, pero sí que el futuro va a estar condicionado por la forma en la que respondamos ante la crisis. De lo que hagamos a partir de ahora no sólo depende el cuándo, sino el cómo saldremos de ella.

En una perspectiva de medio plazo, sin embargo, no todo son interrogantes e incertidumbres. Si algo es seguro a estas alturas, es que lo que quedaba aún en pie de la herencia ideológica de Thatcher y Reagan -su desdén hacia los intentos de corregir los efectos indeseados del *laissez faire*, hacia la política en definitiva- se ha derrumbado. Se inicia ahora una época caracterizada por un papel más activo del sector público en la economía, y en particular por una regulación más abundante y extensa en el sistema financiero. Éste tendrá que ser más transparente; su supervisión, más rigurosa; la coordinación de los supervisores a través de las fronteras, más eficaz; la gestión del riesgo, más cuidadosa.

Pero, aunque el tratamiento más urgente de la crisis se ha centrado en los mercados financieros, los remedios tienen que abarcar una perspectiva más amplia: una cosa es corregir los errores cometidos en la regulación y supervisión del sistema financiero, y otra distinta, que eso sea suficiente para lograr la recuperación de la economía en condiciones sostenibles. Y ello, por varias razones. De un lado, la mayor presión regulatoria sobre los mercados y entidades financieras va a tener como consecuencia -al menos durante un tiempo- la disminución sustancial del grado de apalancamiento y una contribución más mitigada por su parte al crecimiento del PIB, cuyo potencial de cara al futuro es inferior ahora a la tendencia registrada en la última década. De otro, las políticas macroeconómicas de inspiración keynesiana son necesarias para sostener la demanda agregada, pero están sujetas a claras limitaciones en una perspectiva de medio plazo. La política monetaria está cerca de agotar su munición convencional y los bancos centrales saben que no deben repetir en el futuro la actitud relajada que mantuvieron ante la aparición de sucesivas burbujas. Además, la expansión monetaria, hoy tan necesaria, planteará riesgos inflacionistas si se prolonga en exceso. A su vez, las finanzas públicas están asumiendo sobre sus espaldas una carga adicional muy considerable, y en cuanto el estímulo fiscal deje de ser imprescindible para sostener la demanda, los gobiernos estarán obligados a desarrollar estrategias de consolidación y desendeudamiento que les coloquen de nuevo en una posición sostenible.

A la vista de estas restricciones, la búsqueda de motores alternativos para impulsar el crecimiento futuro conduce hacia las políticas estructurales, que habrán de jugar un papel relevante como factor de dinamización y de mejora de los niveles de productividad. A la vez que se sostiene la

demanda, hay que atender lo que sucede en el lado de la oferta. Algunas pistas señalan el potencial innovador de los sectores energéticos y medioambientales en la lucha contra el cambio climático; otras añaden la necesidad de reforzar políticas y estrategias horizontales: educación de calidad a todos los niveles, incremento de los gastos en I+D, financiación adecuada para nuevas iniciativas empresariales, mejora del entorno regulatorio para las pymes, mayor flexibilidad en el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajo. En la mayoría de los casos, su eficacia aumentará si se concibe su diseño a escala europea, aunque no siempre se vean así las cosas desde la perspectiva de los Estados miembros de la Unión Europea, que a menudo creen que sus intereses se defienden mejor mediante iniciativas individuales que sobre la base de decisiones pensadas y coordinadas con sus colegas y con las instituciones europeas.

¿Qué va a suceder ahora en relación con algunas políticas estructurales claves a la hora de superar la crisis de manera sostenible? La crisis del gas ha puesto en evidencia una vez más la necesidad de avanzar hacia una política energética común. Las carencias de la red integrada de infraestructuras europeas de gas y electricidad piden a gritos una solución que, de un modo u otro, deberá ser financiada y desarrollada de manera coordinada a escala de la UE. A su vez, el atraso acumulado por la mayoría de los países europeos en materia de I+D puede convertirse en endémico -con las consecuencias previsibles en términos de pérdidas adicionales de competitividad- si no se aprovechan las economías de escala propias de los proyectos de dimensión comunitaria.

El voluminoso paquete de estímulo fiscal que se viene anunciando por parte de la nueva Administración americana va a traducirse, casi con seguridad, en la multiplicación de los recursos disponibles en apoyo de políticas similares al otro lado del Atlántico. Pero si Europa reacciona en orden disperso, habrá perdido otra vez la oportunidad de alcanzar un puesto entre los primeros en términos de competitividad y dinamismo económico, como ocurrió a partir de la segunda mitad de los años noventa. Además, la UE necesita profundizar en la construcción de un espacio económico integrado, en el que las libertades que conforman el mercado interior -libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales- faciliten el trasvase de recursos humanos, financieros y tecnológicos desde sectores protegidos de la competencia hacia sectores competitivos, desde la vivienda hacia la industria y los servicios, desde actividades con bajo valor añadido hacia sectores de punta.

Pero la Unión Europea es ante todo un proyecto político en torno a un conjunto de valores, entre los cuales se incluye un modelo social avanzado. No puede tener como única divisa socioeconómica la mayor o menor intensidad regulatoria en determinados sectores o el funcionamiento eficaz de los mercados. Si se limita a eso, la idea europea será cada vez menos atractiva para unos votantes agobiados en estos momentos por sus expectativas de empleo o la sostenibilidad del modelo social. El mensaje europeo necesita compatibilizar flexibilidad y

seguridad no sólo en el mercado de trabajo. La modernización de los sectores no financieros de la economía no puede ignorar las preocupaciones de quienes deben sufrir directamente los cambios y las demandas de quienes reclaman más recursos para hacerles frente con éxito. La economía europea debe ser abierta y competitiva, pero la liberalización y la flexibilización tienen que ir acompañadas de políticas que equipen a los ciudadanos para afrontar un entorno competitivo. Y esa combinación no existe hoy por hoy en el conjunto de políticas en manos de las instituciones europeas.

Los ciudadanos intuyen con más claridad que muchos de sus dirigentes que Europa tiene que jugar un papel mucho más activo en este terreno. No es cuestión de nuevos cambios en el Tratado. Ahora que estamos casi al final del proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, hay que evitar caer de nuevo en oscuros debates institucionales. El activismo de Sarkozy -con sus luces y sus sombras de hiperprotagonismo e intergubernamentalidad- ha vuelto a despertar la atención hacia lo que Europa puede hacer actuando unida. Creo que hay razones más que suficientes para que la discusión sobre la proyección de la actual estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo más allá del año 2010 se aborde desde esta perspectiva, ambiciosa pero necesaria. Porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el futuro de cada uno de nuestros países, de nuestras economías, de nuestro modelo social, quizás de la democracia tal como la conocemos.

Joaquín Almunia es comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

El nacionalismo económico reabre la división entre la vieja y la nueva UE

República Checa se enfrenta a Francia, a la que acusa de prácticas proteccionistas

ANDREU MISSÉ - Bruselas - 12/02/2009

El proteccionismo económico que se expande por Europa a medida que la crisis se hace más dura está abriendo una nueva brecha en las relaciones entre la vieja Unión Europea y la nueva, la que nació hace menos de cinco años con la entrada del bloque de países del este. Curadas las heridas políticas que dejó el enfrentamiento por la guerra de Irak -entre un oeste mayoritariamente en contra del conflicto y un este en favor de las tesis del ex presidente de EE UU, George W. Bush-, sangran ahora los primeros enfrentamientos por el creciente nacionalismo económico.

La reciente huelga contra los trabajadores extranjeros en Reino Unido fue un torpedo contra los cimientos del proyecto político de la Unión Europea. A partir de entonces, se han intensificado las medidas adoptadas por algunos Estados para proteger sus bancos e industrias, especialmente en el sector del automóvil. En el seno de la Unión hay en este momento un agrio debate con acusaciones cruzadas de anteponer los intereses nacionales a los europeos. Para abordar este tema, la presidencia checa de la UE ha convocado una cumbre extraordinaria para el 1 de marzo en Bruselas. Se celebrará "a puerta cerrada". Los checos, firmes defensores del libre mercado, quieren saber qué países de entre los Veintisiete ven con buenos ojos el proteccionismo y cuáles no.

La primera batalla abierta la están protagonizando el primer ministro checo, Mirek Topolánek, y el presidente Nicolas Sarkozy, con acusaciones contra el francés de vulnerar las reglas del mercado interior. Ayer, sin remilgos, Topolánek declaró: "Tenemos que darnos cuenta de que cada Estado miembro tiene diferentes enfoques para resolver este asunto. Unos piden más proteccionismo y otros un estricto cumplimiento de las reglas. Yo estoy entre los últimos".

Topolánek dijo esto en una conferencia de prensa junto a José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. Con el propósito de apaciguar los ánimos, Barroso advirtió de que los dirigentes de toda Europa están sometidos a "fuertes presiones" debido a que "la gente y las empresas de la UE y el mundo están enfrentando tiempos duros".

A nadie escapa que la reacción de Topolánek respondió al reciente anuncio de Francia de que concedería préstamos a sus fabricantes de automóviles (6.000 millones de euros), pero con la condición de que las empresas mantengan el empleo en Francia y bajo ningún pretexto lleven parte de su producción a República Checa, Eslovaquia y Rumania, países donde Peugeot-Citroën y Renault tienen plantas de ensamblaje. La medida francesa ha irritado a los Gobiernos del este, que temen que sean estas plantas subsidiarias las que se lleven la peor parte de la crisis. Aparte de Francia, Suecia también estudia medidas similares, es decir, ayudas a sus fabricantes a cambio de que esos recursos se reinviertan sólo en el país. Italia, que tiene a Fiat operando en Polonia, ha dado incentivos al sector, pero no condicionadas a la protección del empleo local, mientras que Alemania -con producción en Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia- puso en marcha un plan similar al italiano, sin vincular los incentivos a la nacionalidad de la marca.

Francia reaccionó en bloque a las críticas checas. Varios ministros del Gobierno de Sarkozy salieron en defensa de las ayudas al sector del automóvil. "No es proteccionismo", dijo el ministro de Asuntos Europeos, Bruno Le Maire. "Se trata de defender nuestra industria y nuestro empleo", añadió. "Creo que es lo menos que podemos esperar de un Gobierno cuando se enfrenta a la

crisis". El primer ministro francés, François Fillon, visitará hoy Bruselas para exponer su plan y tiene previsto visitar varios países europeos incluida, República Checa.

Una de las cosas que más molestaron al Gobierno de Francia es que Topolanek aludió a "reacciones xenófobas" y advirtió que "algunos problemas que estaban latentes ahora son visibles". Barroso coincidió con el primer ministro checo sobre los peligros del auge del nacionalismo económico y se comprometió a examinar a fondo las medidas adoptadas por París. "Analizaremos el plan [francés]", dijo, "y veremos si es compatible con las reglas del mercado interior". "Si no fuera así, tendría efectos negativos sobre otros, que habría que evitar (...). El repliegue nacionalista es una tentación, contra el mercado interior y la libre circulación de las personas", añadió el presidente de la Comisión Europea.

Aparte de la reunión del 1 de marzo, Topolanek y Barroso convocaron una segunda cumbre extraordinaria de los Veintisiete para mayo. Será en Praga pero no se ha precisado fecha. En esta segunda reunión se propondrán medidas sociales ante el fuerte aumento del desempleo. A finales de 2008, la UE registraba 17,9 millones de parados, 1,6 millones más que el año anterior. El desempleo, que estaba en el 7% de la población activa de la UE en 2008, aumentará hasta el 9,5% en 2010, según las previsiones de la Comisión. En el caso de España, pasará del 11,3% al 18,7%.

Cumbres anticrisis

La presidencia checa de turno de la UE ha convocado, con el apoyo de la Comisión, dos cumbres extraordinarias dedicadas a debatir medidas contra la recesión y el desempleo que afligen al continente. La primera se celebrará el día 1 de marzo. La reunión ordinaria del Consejo Europeo está prevista para el 19 y 20 de marzo. La segunda cumbre extraordinaria convocada por los checos se celebrará en mayo, en una fecha aún por determinar.